

Y los que pueden hacer, hacen



Rafael Simancas
Subdirector de TEMAS

Alberto Núñez Feijóo ha anunciado un Congreso para "activar" el PP. De inmediato, las expectativas se dispararon.

Muchos interpretaron que esos dos conceptos, congreso y activación, solo podían anticipar un cambio de rumbo en el principal partido de la derecha española. Porque no tendría sentido convocar todo un Congreso nacional del PP, con la anticipación de un año sobre el calendario previsto, para seguir haciendo lo mismo que hasta ahora. Y porque una activación distinta a la activación presente podría conllevar, por fin, algún tipo de propuesta política o ideológica.

En los tres años que ha durado la presidencia de Feijóo en el PP, se han sucedido las descalificaciones al Gobierno y las exigencias de renuncia para su Presidente. Pero nada ha habido de esa "política para adultos" que anunció con su llegada. Tan solo la apuesta reciente a favor de la energía nuclear puede interpretarse como una propuesta más o menos clara para la sociedad española. Eso sí, dejó bien claro que no la quería para su tierra gallega, y jamás ha aclarado dónde y cuándo instalaría nuevas centrales o nuevos cementerios de residuos radioactivos.

Enseguida aclaró Feijóo sus intenciones. Porque en la frase siguiente al anuncio del Congreso volvió a la matraca antisanchista, que es su monotema favorito. Habrá Congreso del PP, pero no habrá más activación que la misma activación negativa, agorera y descalificadora que ha habido hasta ahora.

Feijóo tiene el poder como objetivo. Y solo atiende dos datos del escenario político en el que ha de moverse: que la mayoría de la ciudadanía española no es de derechas y que los ultras avanzan sobre el terreno que le corresponde.

La estrategia que adopta es consecuente. No habla sobre sus intenciones en cuanto a las políticas

que aplicaría en el caso de llegar al poder, porque no gustarán a la mayoría. Pacta con los ultras allí donde le sirven para ganar influencia, y sigue a los ultras en lo que puede sumarle apoyos. Mientras tanto, todo su empeño se dirige a desgastar al Gobierno, por todos los medios a su alcance, los lícitos y los otros.

Por las buenas o por las malas

Quienes le conocen de antiguo vienen anunciándolo desde su venida a Madrid. Feijóo alcanzó el poder en la comunidad gallega precisamente así. Sin anticipar su programa derechista. Aliándose con la carcupundia política y los negocios más oscuros. Comprando alabanzas y silencios. Y atacando al presidente socialista de la Xunta con malas artes y juego sucio, muy, muy sucio. ¿Por qué iba a hacer ahora algo distinto?

Además, tal estrategia casa bien con la constante histórica de la derecha patria. Aznar lo ha resumido en su consigna para que "quien pueda hacer, que haga". Deslegitimar y desestabilizar. Por las buenas o por las malas. Hasta tumbar al gobierno progresista de turno. "Para terminar con González se rozó la estabilidad del Estado", reconoció Luis María Ansón, uno de los protagonistas del llamado "sindicato del crimen" que aupó al PP al poder en el año 1996.

¿Cómo se hace? Negando cualquier tipo de colaboración con el Gobierno, incluidos los asuntos de mayor interés general, como las ayudas para las empresas y trabajadores afectados por la guerra arancelaria, como los compromisos internacionales en seguridad y defensa, como la dignificación de las pensiones, como la estabilización de los empleos, como los estados de alarma que salvaban vidas en pandemia...

Emponzoñando la vida política con acusaciones falsas sobre familiares del presidente del Gobierno. Financiando con recursos públicos pseudomedios

y panfletos digitales que lanzan basura contra los adversarios políticos. Utilizando las filtraciones de la correspondencia privada del presidente del Gobierno para enfangar el debate público. Alentando acusaciones falsas, descalificaciones y bulos contra el Gobierno, que tienen como efecto la vandalización de las casas del pueblo y el acoso a los políticos progresistas...

Cada día. Y el Congreso nacional del PP nada va a cambiar de todo esto. Lo "activará" en mayor medida, si cabe.

También contra los sindicatos

Justo en la semana del Primero de Mayo, la jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores en todo el mundo, la derecha española ha desatado

una campaña significativa contra los sindicatos.

El PP ha decidido someter al Pleno del Congreso una proposición de ley que veta a los sindicalistas para dirigir un organismo público. Vox ha insultado a los representantes de los trabajadores acusándoles de "comegambas" en una sesión de control de la Asamblea de Madrid. Además, JxC ha calificado de "lobby sindical" a UGT y CCOO por su acuerdo con el Gobierno para reducir la jornada laboral.

La Constitución Española otorga a los sindicatos en su artículo 7 una función clave en nuestro sistema de convivencia democrática, junto a las organizaciones empresariales: "contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios", es decir, la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras.

La ofensiva de las derechas contra las centrales sindicales forma parte de la estrategia global para desvetebrar las sociedades democráticas, dejando inermes a los individuos más vulnerables ante los grandes poderes económicos en la defensa de sus derechos.

Las derechas siempre han entendido, equivocadamente, que el debilitamiento de la representación sindical de los trabajadores redundará en beneficios

Feijóo alcanzó el poder en la comunidad gallega sin anticipar su programa derechista. Aliándose con la carciundia política y los negocios más oscuros. Comprando alabanzas y silencios. Y atacando al presidente socialista de la Xunta con malas artes y juego sucio, muy, muy sucio. ¿Por qué iba a hacer ahora –con el Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez– algo distinto?

para los empresarios y detentadores del poder financiero. Sin embargo, nuestra historia y cualquier análisis comparado mínimamente serio demuestra que las economías más sólidas y las sociedades más justas son aquellas que en mayor medida respetan los derechos de los trabajadores y velan por mejorar sus condiciones laborales.

Ha sorprendido que el PP, en plena crisis geopolítica global, con una guerra arancelaria desatada, unos días después de un apagón peninsular y con la ciudadanía preocupada por la escalada de precios en la vivienda, dedique su oportunidad para presentar una propuesta con rango de ley en el Congreso para... echar al presidente del CIS.

El artículo primero de su proposición de ley establece que el presidente de este organismo público "en los últimos cinco años" no podrá haber "ostentado cargo orgánico alguno en un partido político o fundación dependiente del mismo, o en una organización sindical o empresarial".

Además de la exclusión claramente inconstitucional, la redacción denota un sesgo antipolítico y antisindical preocupante. Cualquier millonario, el dueño de una encuestadora privada o un condenado por corrupción excarcelado podrá ser presidente del organismo público, según el PP. Pero quien haya defendido política o sindicalmente a sus vecinos o compañeros en cualquier barrio o empresa de España estaría vetado para tal cargo. Sería cómico si no resultara tan preocupante.

El trabajo serio y responsable de los representantes y dirigentes sindicales en España es una de las razones, y no de las menores, que explica el crecimiento económico y las conquistas sociales logradas en nuestro país durante los últimos años.

Los sindicatos españoles merecen reconocimiento o, al menos, respeto, sobre todo por parte de aquellos que representamos intereses públicos. Lo dice la Constitución. Y se lo ganan cada día. **TEMAS**